

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

- a) En el motivo Decimoséptimo, se sustituye el guarismo “\$20.000.000” por “\$40.000.000”, y “\$10.000.000” por “\$20.000.000”.
- b) En el fundamento Décimoctavo, se sustituye el guarismo “\$20.000.000” por “\$40.000.000”, y “\$10.000.000” por “\$20.000.000”.
- c) Se sustituye en el románico IV de la parte resolutive, el guarismo “\$10.000.000” por “\$20.000.000”.

Y se tiene en lugar y, además, presente:

1.- Que en la especie se trata de la cónyuge y tres hijas que han demandado daño moral por repercusión por la muerte de su cónyuge y padre, respectivamente, don Orlando Abdón Neira Barahona, producto de los hechos reseñados en el motivo quinto, numeral segundo, en virtud de los cuales una carga de madera llevada por una grúa horquilla cae encima del señor Neira, lo que le provoca lesiones graves y su posterior fallecimiento; hecho acontecido el día 16 de diciembre de 2010.

2.- Que a la fecha de ocurrencia del señalado lamentable acontecimiento, el señor Neira tenía 43 años de edad, mientras que sus hijas, demandantes del rubro que se indica, muy probablemente eran menores de edad, mermando a partir de ese momento la proyección y expectativas futuras del grupo familiar en compañía de



su madre, las que no pudieron prosperar, y que muy por el contrario se vieron limitadas desde que la ausencia del cónyuge y padre importa un vuelco en la vida de todas ellas, por lo que la aflicción sufrida -estima esta Corte- que ocasionó el hecho en cuestión, sumado a las circunstancias y consecuencias del mismo, deben necesariamente elevarse en concepto de daño moral a la cantidad de \$40.000.000 para cada una de las actoras, debiendo considerarse la disminución del 50% referido, conforme a la restricción ya anotada y contenida en el artículo 2330 del Código Civil, en cuanto reducción del monto por exposición imprudente al daño, como refiere el fundamento Décimoquinto.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil **se confirma** la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, **con declaración** que la indemnización que por daño moral debe pagar Empresa Portuaria Coronel S.A. y Compañía Puerto de Coronel S.A. a las demandantes Karin Ivonne Sepúlveda Muñoz, Leslie Kathleen Neira Sepúlveda, Catalina Araceli Neira Sepúlveda y Michelle Yannina Neira Sepúlveda, se eleva a la suma de \$20.000.000 para cada una de ellas, con los reajustes e intereses señalados en el fallo que se revisa.

Concurre al fallo precedente el **Ministro Sr. Rivera**, discrepando solo en aquella parte de la sentencia en que se mantuvo el rechazo de la acción indemnizatoria que, por daño moral, había deducido, además, el padre del trabajador fallecido, Rigoberto Neira Castro, arguyendo el fallo de origen a un privilegio en carácter preferente y absoluto a la intentada por igual concepto por la cónyuge sobreviviente y las hijas del difunto Neira Barahona, ello por



aplicación vía analogía de las reglas de sucesión abintestato, así como del artículo 108 del Código Procesal Penal, el cual establecería un determinado orden de prelación en igual sentido.

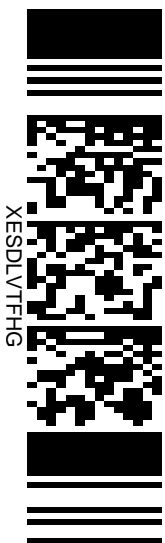
En relación a ese preciso tópico, este disidente fue del parecer de consignar su **voto en contra**, pues estuvo por incluir dentro de los beneficiarios de la indemnización resuelta en la sentencia que se revisa, también al padre del trabajador fallecido, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:

1°.- Que, el actor ya precisado, ha sufrido un daño propio por la pérdida de su familiar, en específico, por la muerte de su hijo, en el accidente ocurrido por la negligencia de las demandadas, por lo que tiene la calidad y legitimidad activa para ejercer la acción tendiente a reparar los perjuicios sufridos derivados del ilícito civil.

2°.- Que, la sentencia dio por establecida la responsabilidad de las demandadas Empresa Portuaria Coronel S.A., y de Compañía Puerto Coronel S.A., estableciendo su existencia y que son concurrentes por su actuación negligente.

3°.- Que, no existe disposición legal en nuestro ordenamiento que limite, rechace o prohíba la indemnización de perjuicios que, por daño moral, puedan sufrir los padres, cuando un hijo sufra un accidente, que en el caso de autos determinó la muerte del mismo por responsabilidad de las demandadas.

4°.- Que, establecer limitantes, por la vía de la analogía -como hace el fallo-, no puede servir de motivo suficiente para tal determinación, conforme se precisó en el motivo precedente de esta disidencia, siendo que ello supone, además de crear una diferenciación -que no tiene reconocimiento legal expreso-, desconoce por un lado que se trata de un daño extrapatrimonial



personalísimo, que consiste en el dolor o pesar que al demandante irroga la muerte de un ser querido y no en la privación de una ventaja o beneficio de orden pecuniario que de él recibiera, siendo que su justificación, procedencia y límite está dado únicamente por la acreditación del mismo, único baremo legal procedente.

5°.- Que, a mayor abundamiento, los titulares de la acción padres de la víctima forman parte natural del núcleo más íntimo y directo de cualquier grupo familiar, por lo tanto, legitimados activos para demandar los daños morales, dolor, sufrimiento o afectación espiritual que normalmente ocasiona la pérdida de un descendiente directo sujeto su reconocimiento a su justificación probatoria, condición que se cumple en el caso propuesto, sin perjuicio de que otros parientes así también lo demanden y justifiquen.

6°.- Que, consagrar una suerte de procedencia exclusiva, únicamente por vía de parentesco, y dentro de él, preferir a grupos fijos de beneficiarios, todo por vía analógica, importaría permitir que, no obstante que un hecho ilícito cause un daño a varias personas diferentes, experimentando éstas un perjuicio personal, desconocería que les pertenece una acción de responsabilidad a cada una de ellas y a las diferentes víctimas, impidiéndoles de facto que pudieran unir sus acciones en un solo juicio contra el responsable y a pedir cada uno de ellos una indemnización distinta siendo todos parientes del occiso.

Peor aún, dejaría fuera -desde siempre- a todos aquellos que carezcan de la existencia de vínculo de parentesco con el ofendido, lo que no parece factible.

7°.- Que, en efecto, para que las personas afectadas por repercusión del perjuicio sufrido puedan demandar el daño moral, no

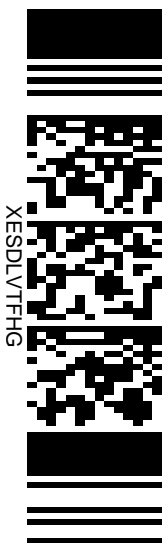


es necesario que exista vínculo de parentesco alguno con la víctima, siendo que como ya se ha insistido, este daño es uno de índole afectivo, de lo que deviene que todos aquellos que carezcan de él, también podrían padecerlo, al afectarlos personalmente, ello sin ser herederos ni parientes, como pudiera ser el caso de que la persona que los demandara fuera afectado por el fallecimiento un íntimo amigo, que pudiera ser incluso más cercano que familiares directos del fallecido. Como se aprecia, la ley no atiende a la naturaleza del vínculo que los liga con el directamente ofendido ni limita la reparación de este daño a determinadas personas.

8°.- Que, de lo que se viene expresando, solo cabe concluir que el único límite legal válido que permite evitar una eventual multiplicidad de acciones por daño moral, es al que ya se ha hecho referencia, esto es, solo a aquellas que efectivamente acrediten haber sufrido real y efectivamente un dolor profundo y verdadero.

9°.- Que, finalmente, la invocación del fallo que se revisa, a aplicar por analogía las reglas de la sucesión abintestato, se controvierte suficientemente por lo expresado en el motivo precedente. En tanto que, la alusión en igual sentido al artículo 108 del Código Procesal Penal, cabe señalar que dicha norma es una procedimental del orden penal, cuyo objetivo es totalmente contrario al que se pretende darle en la sentencia, ya que únicamente se refiere al concepto de víctima para ese procedimiento y, en lo particular, determinar los titulares que pudieren ejercer los derechos que en ese Código se les otorgan, esto es, a efectos precisos de regular su intervención procedimental en el proceso penal.

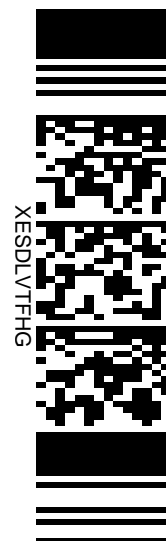
10°.- Que, en igual sentido se ha manifestado la E.C.S., en sentencia de 13 de junio de 2019, Rol 5473-2018, ha expresado:



“ En una primera aproximación, del análisis de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que entregan la base sobre la cual se construye el sistema de responsabilidad extracontractual, es posible concluir que no existe sustento normativo que avale la pretendida limitación para reclamar indemnización por daño moral en el caso de las víctimas por repercusión, desde que a la luz de tales disposiciones la regla es que todo daño producido por una conducta negligente de otra persona da lugar a la obligación de indemnizar.

El problema planteado dice relación con determinar quiénes son titulares de la acción de reparación por el daño moral provocado por un delito o cuasidelito civil, lo que obliga a distinguir entre las víctimas inmediatas o directas y las que lo son en forma indirecta o por repercusión. Las primeras, son las personas en quienes recae la lesión, ofensa o injuria que lo causa, en tanto las segundas, son las que sin tener esa calidad, también lo sufren, en razón de que el daño inferido a las víctimas directas los hiere en sus propios sentimientos o afectos, o les lesiona algún interés o derecho extrapatrimonial del que son titulares, no requiriéndose que exista entre ellos una determinada vinculación jurídica; en términos de esta Corte, “aún cuando no sean sus parientes o herederos.” (Fallos del Mes N°301, dic.1983, págs. 765-769).

Como advirtió tempranamente el profesor Alessandri, para tener derecho a demandar indemnización de perjuicios, la ley no atiende a la naturaleza del vínculo que los liga con el directamente ofendido, ni limita la reparación de este daño a determinadas personas, sólo importa que lo hayan sufrido, en este caso, como consecuencia del ocasionado a la víctima directa. (Alessandri, Rodríguez, Arturo, De La Responsabilidad extracontractual en el



derecho civil chileno, Editorial Jurídica, año 1943, pág.457 y ss.). En consecuencia, en esta situación se podrán encontrar, entre otros, el cónyuge de la víctima directa, sus parientes, amigos, novio o novia, compañeros de trabajo, etc., todos los que en teoría podrían demandar su propio daño moral, ya que el único límite razonable que se puede imponer para acceder a repararlo es que quienes lo soliciten hayan acreditado su existencia y los requisitos exigidos para que sea indemnizable (Díaz Schwerter, José Luis, El Daño Extracontractual, Jurisprudencia y Doctrina, Edit. Jurídica, 1997, pág.126 a 129).

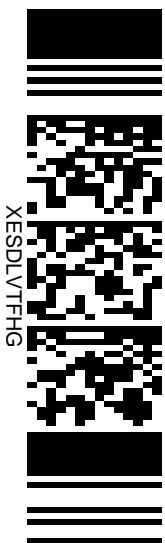
En esa misma línea, reconociendo esta Corte que la extensión de las personas a quienes se debe indemnizar no puede ser indefinida, establece que la cuestión “se reduce a un problema de prueba, pues es la actividad probatoria de las partes la que determinará si una determinada persona ha sufrido un perjuicio y la entidad del mismo”, agregando que “desde un prisma puramente lógico se puede presumir que los parientes más cercanos –entre los que se encuentran los padres, cónyuge e hijos del occiso– sufren dolor o aflicción que constituye un daño inmaterial susceptible de ser indemnizado”, sin perjuicio de prevenir que ello no significa que siempre deban ser indemnizados, “pues se puede demostrar que en un caso concreto este daño no ha existido”, y que en la medida que ese vínculo de parentesco se va distanciando ya no se podrá presumir esa aflicción y será “la prueba de las partes la que determinará la existencia de aquél, atendidos los lazos concretos y cercanía que logren acreditarse, cuestión que determinará la intensidad del daño y el monto a indemnizar”, para terminar concluyendo que incluso “personas que no tienen ningún grado de



parentesco, o que no formaban parte de la familia nuclear, pueden acreditar que con la víctima los unían especiales lazos y, en consecuencia, demostrar que han sufrido un daño susceptible de ser indemnizado”. (C.S. rol N°9428-2013).

El criterio que se ha expuesto, resulta ser, además, coherente con el principio de que todo daño debe ser reparado, lo que implica que no es posible excluir a priori a determinadas personas, o establecer condiciones de admisibilidad para demandar tal reparación. (Elorriaga, Fabián, 1999, Del Daño por repercusión o rebote, Revista Chilena de Derecho 26, pág. 387). Por otra parte, si bien alguna doctrina ha sugerido la aplicación de una suerte de orden de prelación, basada en normas contenidas en el Código Procesal Penal, lo cierto es que, al menos en lo que dice relación con el artículo 108 de dicho cuerpo normativo, no es posible darle el alcance que se pretende, en la medida que no se trata de una norma decisoria litis, sino ordenatoria litis, con validez para el nuevo enjuiciamiento penal y destinada a regir en ese ámbito, por lo que el establecimiento de jerarquías para ese fin, no puede extinguir el derecho de los perjudicados en su interés legítimo para demandar en sede civil, como ya lo ha establecido esta Corte (C.S., rol N°31.713-14)....”. Así también, sentencia de la E.C.S., de 25 de noviembre de 2015, Rol 37.713-2014.

11°.- Que, por todo lo expresado, es que este disidente fue del parecer de revocar la sentencia en la parte que excluyó de la reparación de los perjuicios a don Rigoberto Neira Castro, y que estuvo por acoger la demanda deducida por él, al haberse acreditado en autos todos los presupuestos de procedencia de su acción y, en



definitiva, se le incluyera en los pagos ya ordenados en esta sentencia de segundo grado.

Regístrese y devuélvase.

Redactó el Ministro (S) Carlos Hidalgo.

N°Civil-6786-2018

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por señor Alejandro Rivera Muñoz, integrada además, por el Ministro (S) señor Carlos Hidalgo Herrera y el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett. No firma el abogado integrante señor Montt, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Ministro Suplente Carlos Osvaldo Hidalgo H. Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.